

C.A. de Santiago

Santiago, doce de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece FRANCISCO BLAVI AROS y FELIPE CAMPOS CORDERO, en representación de AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A. (“AVLA”), sociedad anónima del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en avenida Presidente Riesco N° 5.335 oficina 604, de la comuna de Las Condes, quien interponen reclamo de ilegalidad respecto del Oficio Ordinario N°89.259, de fecha 25 de noviembre de 2022, ratificado por la Resolución Exenta 8.847, de fecha 22 de diciembre de 2022, que acogió parcialmente el recurso de reposición administrativo presentado por la reclamante, solicitando que se acoja íntegramente el presente reclamo, declarándose que el acto administrativo es ilegal y que causa perjuicio a su representada, dejándolo sin efecto, disponiendo todas las medidas que estime procedentes para restablecer el imperio del derecho.

En primer lugar, indica que el reclamo cumple con los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 70 de la Ley 21.000. En efecto, el reclamo: (i) se interpuso dentro del plazo legal; y, señala con precisión, (ii) el acto reclamado, esto es Oficio Ordinario 89.259, dictado el 25 de noviembre de 2022, que fue modificado parcialmente por la Resolución Exenta 8847, de 22 de diciembre de 2022; ambos dictados por orden del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero; (iii) las disposiciones infringidas, esto es, el artículo 537 y 538 bis, ambos del Código de Comercio, entre otras; y, (iv) las razones por las cuales perjudica a su representada, consistente en dejar fuera del mercado a los seguros de crédito comercializados por



ella, al punto que incluso se le expone a que las pólizas emitidas sean consideradas nulas de pleno derecho, como ilegalmente pretende la Comisión.

En segundo lugar, trata los antecedentes del reclamo.

Explica que AVLA, es una aseguradora chilena constituida el año 2014, líder en el desarrollo de soluciones crediticias para que todo tipo de personas y empresas puedan acceder a financiamiento, siendo una de las primeras empresas en ofrecer seguros de crédito asociados a mutuos hipotecarios endosables, los que son comunes en otros países. Lo anterior consiste básicamente en que el deudor contrata, junto con el mutuo hipotecario, un seguro de crédito de modo tal que quien otorga el préstamo acepta hacerlo precisamente porque una aseguradora le garantizará que el crédito le será pagado incluso en el evento de incumplimiento del deudor, dando cuenta los beneficios de la referida operación.

Señala que la legislación Chilena expresamente permite la emisión de seguros de crédito que garantizan al acreedor, asociados a productos financieros como los mutuos hipotecarios precisando que la comercialización de seguros de crédito conjuntamente con mutuos hipotecarios se efectúa porque así lo permite el texto expreso del artículo 538 Bis del Código de Comercio

Indica que de la lectura del mencionado artículo se puede concluir que junto con el otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, solo se pueden contratar seguros que tengan por objeto: (i) Asegurar el pago de la deuda al acreedor; o, (ii) Proteger los bienes dados en garantía. Así, el Artículo 538 Bis permitió de manera clara e inequívoca la contratación de seguros cuyo objeto sea garantizar el pago de la deuda al acreedor.



Refiere que el mencionado artículo entregó un mandato a la Comisión para el Mercado Financiero con el fin de que especificara con mayor detalle, mediante la dictación de una norma de carácter general, los distintos tipos de seguros que estaban cubiertos por la norma. Así, el 13 de agosto de 2021, la CMF dictó la Norma de Carácter General N°460, y en lo relativo a los seguros que tienen por objeto el pago de la deuda del acreedor se encuentra la letra A del Título II de la Norma 460, el que reproduce prácticamente de manera íntegra el texto de lo indicado en el artículo 538 bis, calzando perfecto la contratación de seguros de crédito conjuntamente con productos financieros, como mutuos hipotecarios.

Señala que en el marco de fiscalización de cumplimiento del artículo 538 bis y de la Norma 460, es que la CMF le solicitó a su representada una serie de antecedentes, dándose respuesta por su representada el 26 de septiembre del año 2022.

Indica que, en este contexto, es que se dictó el acto administrativo reclamado, pues a pesar de la información y explicaciones entregadas, mediante Oficio Ordinario 89.259, de fecha 25 de noviembre de 2022, la CMF sostuvo que AVLA había emitido pólizas de seguro de crédito asociadas a mutuos hipotecarios endosables que supuestamente, a juicio de la CMF, “no se ajustan a lo preceptuado por la Norma de Carácter General N°460 (en adelante NCG N°460) de 13 de agosto de 2021.

Posteriormente, su representada interpuso recurso de reposición, el que fue acogido de manera parcial, pues si bien la reclamada reconoció que el acto carecía de motivación o falta de fundamentación, mantuvo su decisión de fondo, ratificando explícitamente que consideraba que los seguros que comercializa su



representada supuestamente no se encontrarían dentro de las hipótesis permitidas por la normativa, es decir, la CMF consideró que no se pueden contratar seguros para garantizar el pago de la deuda al acreedor (como los seguros de crédito de AVLA) de manera conjunta o en el mismo acto que la contratación de un servicio o producto financiero (como los mutuos hipotecarios endosables de Creditú); en circunstancias que el artículo 538 Bis del Código de Comercio expresamente lo autoriza.

En este orden de ideas, refiere que el mencionado acto es ilegal, pues pretende prohibir una actividad que la norma expresamente permite.

En tercer lugar y en lo que dice relación con el acto administrativo reclamado, precisa que éste está compuesto por el denominado “Oficio Ordinario N°89.259”, de 25 de noviembre de 2022, ratificado posteriormente por la “Resolución Exenta 8.847”, de fecha 22 de diciembre de 2022 que acogió parcialmente el recurso de reposición administrativo deducido por su representada, el que dispuso que AVLA habría emitido pólizas de seguro de crédito en conjunto con el otorgamiento de mutuos hipotecarios endosables, sin ajustarse a lo preceptuado por la Norma 460 e instruyó a su representada a dar íntegro cumplimiento y ajustarse a lo dispuesto en la Norma N° 460, sosteniendo que cualquier seguro distinto de aquellos señalados bajo el Título III, como ocurre -según su criterio- con el seguro de crédito, debía cumplir con lo preceptuado en el título IV de la misma Norma 460; esto es, entre otras cosas, la ratificación por escrito que debería efectuar el cliente de manera posterior.

En ese orden de ideas, explica que el Acto Administrativo indicó que, de conformidad a la determinación efectuada por la CMF,



solo los seguros cuyas pólizas contemplaran las características de la letra A, del título III de la Norma 460 y, adicionalmente, que cubrieran aquellos riesgos enunciados en la letra B inmediatamente posterior, podrían ser comercializados conjuntamente con el otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros.

En cuarto lugar, entre las razones de por qué el acto reclamado es ilegal, denuncia cuatro infracciones:

En cuanto a la primera infracción, indica que el acto reclamo vulnera el artículo 538 bis del Código de Comercio, desde que dicho artículo permite de forma clara, expresa e inequívoca, que las personas que contraten algún tipo de producto o servicio financiero puedan, conjuntamente, contratar un seguro que tenga por objeto garantizar el pago de la deuda al acreedor, arribando a dicha conclusión haciendo remisión a la historia de la ley y a las normas de interpretación de la ley.

En efecto, afirma que la CMF, contraviniendo de manera flagrante lo indicado en el artículo 538 Bis del Código de Comercio y en la letra A) de la Norma 460, ahora señala que AVLA estaría comercializando pólizas de seguros que estarían prohibidas, sustentando su posición en la letra B) de la misma Norma 460. Postula que la CMF “fabricó” una teoría según la cual la Norma 460, por mandato del Artículo 538 Bis, estaría prohibiendo la comercialización de seguros de crédito en conjunto con el mutuo hipotecario endosable, indicando que en la letra B) de la Norma 460 se estarían especificando los seguros que son posibles de contratar, de manera más detallada y exacta, en términos tales que, los no mencionados en la letra B, no serían susceptibles de contratación sin una ratificación posterior del deudor, prohibiendo el seguro de crédito,



que es aquel expresamente permitido previamente, en la letra A y, más importante aún, en el Artículo 538 Bis.

Explica que la consecuencia de la prohibición contenida en el acto administrativo, es la nulidad de los contratos de seguro de crédito que se celebren o se hayan celebrado sin ser posteriormente ratificados por el deudor.

En lo que dice relación con la segunda infracción, sostiene que el acto reclamado vulnera el artículo 537 del Código de Comercio. En efecto, explica que en nuestra legislación solo el asegurado puede ponerle término de manera anticipada a un contrato de seguro. Sin embargo, el acto administrativo ha ordenado a su representada ajustarse al título IV de la Norma 460,24 que establece que el cliente financiero -el tomador, no asegurado- puede terminar anticipadamente el seguro, en cualquier momento, independiente del medio por cual lo contrató.

En cuanto a la tercera infracción, indica que el acto reclamado vulnera el artículo 6 inciso primero de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley N° 18.575, desde que se infringe el principio de legalidad, pues la CMF al dictar el Acto Administrativo reclamado, lo hizo en clara infracción de las normas invocadas, pues se excedió en las atribuciones que el Artículo 538 Bis y artículo 5 de la Ley 21.000 le otorgaron, prohibiendo ilegalmente la contratación de un tipo de seguro que, previamente, la propia ley expresamente había autorizado.

Finalmente, sostiene que el acto reclamado vulnera el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y el artículo 4 de la Ley de Seguros, desde que, la consecuencia directa del Acto Administrativo reclamado es que AVLA no podría seguir



comercializando los contratos de seguro de crédito que ofrece al mercado, impidiéndole de tal manera ejercer su legítimo derecho a desarrollar su respectiva actividad económica, haciendo presente que, el negocio que desarrolla su representada es precisamente el que la CMF le está privando de realizar, es decir, la comercialización de seguros de crédito que garantizan la deuda al acreedor, conjuntamente con el otorgamiento de productos financieros como los denominados “mutuos hipotecarios endosables”.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja la presente reclamación, declarándose que el acto administrativo es ilegal, dejándolo sin efecto, así como también disponer las medidas que se estimen procedentes conforme a derecho para remediar sus graves efectos.

Segundo: Que informa José Antonio Gaspar, abogado, en representación de la Comisión para el Mercado Financiero, persona jurídica de derecho público, ambos domiciliados en avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Torre 1, piso 9 de la comuna de Santiago, solicitando el rechazo de la reclamación en todas sus partes, con costas.

A modo preliminar, indica que la reclamante desconoció -y sigue desconociendo en este reclamo- el carácter taxativo del listado de riesgos cubiertos, que se comprenden en la letra B del Título III de la NCG N°460, no estando contemplado el riesgo de Crédito como uno de los riesgos que no requiere ratificación por parte del cliente financiero. Así, la situación examinada en la especie debe ajustarse, en consecuencia, al Título IV de la NCG N°460, requiriendo que cualquier seguro que no se encuentre dentro de los contemplados del



título III, deba de contar con ratificación por parte del cliente financiero dentro de los 30 días posteriores a la contratación del seguro.

En efecto, indica que la NCG N°460, en su título III letra B, señala taxativamente cuales serían los riesgos en que se permite contratar sin ratificación por parte del cliente en la comercialización de productos financieros. A mayor abundamiento el encabezado de la letra B de título III indica: “Las pólizas y cláusulas adicionales que se contraten, cuyo objeto exclusivo sea el asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía, sólo podrán contemplar los siguientes riesgos”. Con esto, el regulador ha querido indicar que sólo los riesgos que señaló podrán ser cubiertos sin la ratificación del contratante o tomador del seguro.

En cuanto a los antecedentes de hecho, refiere que en el marco de un proceso de fiscalización solicitó a la reclamante documentación, resolviéndose en definitiva a través del Oficio Ordinario N°89.259 de 25 de noviembre de 2022 -acto reclamado- que la compañía emitió pólizas de seguro de crédito, que se incorporaron de manera conjunta o en el mismo acto con mutuos hipotecarios endosables otorgados por Creditú Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. sin ajustarse a la NCG N°460.

Al respecto, el acto reclamado citó lo dispuesto en el Título III de la NCG N°460, dando cuenta expresa de los seguros que al tenor de lo dispuesto en el artículo 538 bis del Código de Comercio y las potestades entregadas a este Servicio, pueden ser contratados en el mismo acto o de manera conjunta, sin que exista referencia a los seguros de crédito. Así, se instruyó a Avla dar cumplimiento íntegro y ajustarse a lo dispuesto en la NCG N°460, de manera tal que cualquier otro seguro distinto a los señalados en el Título III, deberán



ajustarse a las disposiciones establecidas en el Título IV de la citada norma.

En contra de la mencionada decisión, se interpuso recurso de reposición la que fue acogida parcialmente por Resolución Exenta N° 8847, de fecha 22 de diciembre de 2022, instruyendo a Avla a dar cumplimiento íntegro y ajustarse a lo dispuesto en la NCG N°460, de manera tal que cualquier otro seguro distinto a los señalados en el Título III, deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el Título IV de la citada norma.

A continuación se refiere a las alegaciones, excepciones y defensa de su representada, pasando a hacerse cargo de los supuestos motivos de ilegalidad contenidos en el reclamo presentado por AVLA.

En primer lugar, se refiere a los seguros que pueden ser contratados sin ratificación del contratante de acuerdo con el artículo 538 bis del Código de Comercio.

Indica que el mencionado artículo, en su inciso primero, establece un mandato legal al servicio, por el cual se le faculta para determinar qué seguros pueden ser contratados sin ratificación y cuáles deberían de contar con tal ratificación por parte del cliente financiero, dictando al efecto la NCG N° 460.

Sobre lo anterior, sostiene que la posición del reclamante ignora por completo la parte final de inciso primero que señala, precisamente, que será la CMF la encargada de determinar qué seguros pueden ser contratados sin ratificación a través de una Norma de Carácter General. Asimismo, ignora el carácter taxativo que dispone la NCG N°460, en su título III, letra B, respecto a los riesgos que pueden cubrir los seguros que no requieren ratificación, y



dentro de los cuales no se encuentra el riesgo cubierto por el seguro de crédito.

En efecto, afirma que no hay una contradicción normativa entre el artículo 538 bis y la NCG N°460, ya que lo que hace la NCG es delimitar, qué seguros no pueden ser ratificados y cuáles, sí pueden ser ratificados, que es lo que mandata la ley. En consecuencia, los Seguros de Crédito quedan excluidos de la aplicación del título III, debiendo procederse al rechazo del reclamo de ilegalidad presentado conforme a los argumentos expuestos.

Agrega que su representada en ningún caso ha prohibido la contratación de Seguros de Crédito en conjunto con el otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, siempre y cuando estos consten con ratificación por parte del cliente, que exige la normativa objeto de autos y que no ha privado a la reclamante de la posibilidad de ejercer su negocio, sólo que éste se ajuste a los requisitos establecidos por la ley y la NCG N°460.

En síntesis, indica que los únicos seguros que no requieren ratificación son los enumerados en la letra B del título III de la NCG N°460. Esto por expreso mandato del artículo 538 bis del código de comercio que faculta a la CMF, para determinar cuáles serán los seguros que pueden ser contratados con ratificación y cuáles no.

En lo que dice relación con la supuesta vulneración del artículo 537 del Código de Comercio, respecto a lo establecido en la NCG N°460 Título IV, resulta completamente desajustada al objeto de la situación fiscalizada y atiende a una alegación de ilegalidad respecto de la NCG N°460 que no fue intentada en el momento oportuno.

Respecto de este último punto, señala que la NCG N°460 fue dictada con fecha 13 de agosto de 2021, por lo que de conformidad a



lo dispuesto en el artículo 70 del D.L. N°3.538, en caso de estimar que la respectiva norma de carácter general fuere ilegal y le causara perjuicio, la Reclamante debió haber deducido el respectivo reclamo de ilegalidad dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. Aquello, no ocurrió.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración al principio de legalidad, afirma que la Comisión no ha excedido sus facultades, toda vez que es la misma ley Orgánica, contenida en el D.L. N°3.538 de 1980, en su artículo 5 número uno, la que consagra expresamente las facultades para dictar normas de carácter general para interpretar administrativamente la norma. En el caso concreto, el artículo 538 bis del Código de Comercio habilita a la CMF para la dictación de la NCG N°460, poder determinar los seguros que requieren ratificación y los seguros que no requieren ratificación y su consecuente regulación, en la contratación conjunta de productos financieros.

Conforme a lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de reclamación, con costas.

TERCERO: Que al alero del reclamo establecido en el artículo 70 de la ley N° 21.000 que, Crea la Comisión para el Mercado Financiero, AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. dedujo reclamo de ilegalidad respecto de dos actos emanados de la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante CMF, a saber:

a) El Oficio Ordinario N°89.259, de fecha 25 de noviembre de 2022, por el cual instruyó a la compañía de seguros reclamante "(...) dar cumplimiento íntegro y ajustarse a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 460 que determina los seguros que se pueden contratar de acuerdo con lo señalado en el artículo 538 bis



del Código de Comercio. Cualquier seguro distinto a los señalados en el Título III de la NCG N° 460, como ocurre con el seguro de crédito, deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en el Título VI de la citada norma”.

b) La Resolución Exenta N°8847, de fecha 22 de diciembre de 2022, que acoge parcialmente el recurso de reposición deducido por AVLA en contra del oficio N° 89.259, solo en aquella parte relativa a la fundamentación del acto administrativo impugnado, la que deberá entenderse -según dice- conforme a lo expuesto en esta resolución y, enseguida, instruyó a AVLA a dar cumplimiento al oficio referido, indicándole nuevamente que debía ajustar su actuación a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 460 que determina los seguros que se pueden contratar de acuerdo con lo señalado en el artículo 538 bis del Código de Comercio.

CUARTO: Que para una mejor comprensión del asunto debatido conviene precisar lo siguiente:

- a) La ley N° 21.314 que “Establece Nuevas Exigencias de Transparencia y Refuerza las Responsabilidades de los Agentes de los Mercados, Regula la Asesoría Previsional, y otras materias que indica” incorporó a través de su artículo 9 el artículo 538 bis al Código de Comercio, del siguiente tenor: *“Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar en el mismo acto o de manera conjunta seguros distintos de aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía, los cuales serán determinados por la Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general.*



Serán nulos de pleno derecho los seguros que se contraten en contravención con lo señalado en el inciso primero.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no será aplicable si dichos seguros son ratificados por el contratante del producto o servicio financiero, sin mediar mandato al acreedor, dentro del plazo de 30 días desde su suscripción. Sólo podrá cobrarse prima por estos seguros desde la fecha de su ratificación.

En tal caso, los riesgos serán de cargo del asegurador desde la fecha que establezca la póliza, o en su defecto, desde el momento de la ratificación.

La ratificación deberá realizarse por escrito, personalmente o por correo electrónico u otro medio equivalente, y deberá constar de forma expresa y clara la voluntad de estar ratificando la contratación del seguro, junto con especificarse que se trata de un seguro voluntario que no dice relación con el otorgamiento, renegociación o repactación de las operaciones contratadas."

- b) En cumplimiento del artículo 538 bis del Código de Comercio la CMF dictó la Norma de Carácter General N° 460 de 13 de agosto de 2021, determinando los seguros que se pueden contratar de acuerdo a lo señalado en el artículo 538 bis del Código de Comercio.
- c) En el marco de una fiscalización relativa al cumplimiento de la Norma General N° 460, el 15 de septiembre de 2022 se requirió a AVLA antecedentes relativos a la comercialización de seguros de crédito asociados a mutuos hipotecarios endosables, en especial, se le requirió que explicara cómo se ajusta la forma de comercialización del seguro de crédito con lo establecido en la NCG 460, particularmente el Título IV de dicha norma.



- d) El 26 de septiembre de 2022, AVLA manifestó que la comercialización se realizaba en forma externa por un agente de ventas y explicó que la justificación de la contratación en el mismo acto o de manera conjunta al producto o servicio financiero era el artículo 538 bis del Código de Comercio y lo regulado en la NCG 460, especialmente en su Título III en cuanto señala que, podrían ser contratados en forma conjunta con un producto financiero los seguros que tengan por objeto cubrir el pago de la deuda, del cual el seguro de crédito por su definición cumpliría con tal requisito a mayor satisfacción que ningún otro tipo de seguro.
- e) El 25 de noviembre de 2022 la CMF dicta el oficio N° 89.259 al considerar que AVLA emitió pólizas de seguro de crédito, que se incorporaron de manera conjunta o en el mismo acto con mutuos hipotecarios endosables, sin ajustarse a la NCG 460, indicándose que el Título III indica cuáles seguros pueden ser contratados de esa forma sin que exista referencia a los seguros de créditos.
- f) El 2 de diciembre de 2022 AVLA interpuso reposición administrativa en contra del oficio N° 89.259, indicando que el proceso de comercialización de los seguros de crédito se ajustaba a la normativa, esto es al artículo 538 bis del Código de Comercio, que por su parte la NCG 460 en su Título III letra A permite la contratación de seguros en el mismo acto o de manera conjunta con el servicio financiero, de aquellos que tienen como cobertura asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía e indica que además de los seguros de la letra B están los que tienen por finalidad asegurar el crédito.
- g) El 22 de diciembre de 2022, la CMF dicta la Resolución Exenta N° 8847 que acoge parcialmente el recurso de reposición, en cuanto



entrega los fundamentos que se consideró para la decisión del oficio 89.259 y reitera las instrucciones de éste último.

QUINTO: Que de lo expuesto es posible asentar que fue el legislador quien encomendó a la CMF la determinación de los seguros que teniendo como objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía podrían contratarse en el mismo acto o de manera conjunta con el otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros.

Partiendo de esta premisa, se analizará a continuación las ilegalidades reclamadas.

I.- De la primera ilegalidad: Vulneración del artículo 538 bis del Código de Comercio:

SEXTO: La reclamante plantea que el artículo 538 bis permite en forma clara, expresa e inequívoca que las personas que contratan algún tipo de producto o servicio financiero puedan, conjuntamente, contratar un seguro que tenga por objeto garantizar el pago de la deuda. Refiere que la norma es clara por lo que no se puede desatender su tenor literal, e incluso, aduce que si se consulta el espíritu del precepto en la historia fidedigna de la ley N° 21.314, consta que el legislador buscó evitar que se supeditara el otorgamiento de algún producto o servicio financiero a la contratación de seguros que fueran innecesarios, o como se conoce, de “ventas atadas”. Cita al efecto, una sesión durante la discusión de la norma, en la que el Director Jurídico de la CMF señor Gaspar, explicó que se buscó una fórmula para separar los seguros que no digan relación directa con la operación crediticia, por lo que los seguros de crédito sí pueden ser contratados de esta forma.



Agrega que la Norma 460 dictada bajo el mandato del artículo 538 bis ratifica que los seguros de crédito están permitidos por la legislación, específicamente en la letra A del título III que replica la norma del 538 bis.

De esta forma estima que la decisión cuestionada contraviene en forma flagrante el artículo 538 bis y la letra A) de la Norma 460, asilándose la reclamada en la letra B) de la Norma 460 postulando que en ella se especifican los seguros que son posibles de contratar, de manera más detalladas y exacta, por lo que aquellos seguros no mencionados en la letra B, no son susceptibles de contratación sin una ratificación posterior del deudor, impidiendo así que el seguro de crédito que es el expresamente permitido en la letra A pueda contratarse en forma conjunta.

SEPTIMO: Que de la lectura atenta del artículo 538 bis del Código de Comercio, puede convenirse que efectivamente el precepto permite que junto con la contratación de un producto o servicio financiero se contrate “aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía, **los cuales serán determinados** por la Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general” (énfasis agregado).

Es decir, si bien la norma permite la contratación conjunta con el producto o servicio financiero de esta clase de seguros- los que tienen por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía-, acto seguido encomienda a la CMF su determinación. En otras palabras, el legislador no establece que todos los seguros que tengan por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los



bienes dados en garantía puedan contratarse en forma conjunta con el servicio financiero sino que sólo aquellos que determine la CMF.

Sobre el particular, no cabe otra interpretación, pues de lo contrario no tendría sentido el encargo legal que hizo a la CMF y habría bastado simplemente culminar el precepto con la indicación de estos seguros sin necesidad de que fueren “determinados” por el órgano regulador.

OCTAVO: Que enseguida, del examen de la Norma CG N°460, se colige que en su Título III referido a “Seguros que se pueden contratar sin ratificación en el mismo acto o de manera conjunta con productos o servicios financieros”, éste parte indicando que cualquiera de los seguros señalados en este título, que se comercialice o contrate en el mismo acto o de manera conjunta con la operación financiera no requerirá ser ratificado por el cliente financiero. Luego en la Letra A.- da las características de los seguros a contratar, repitiendo aquí en términos generales lo dispuesto en el artículo 538 bis del Código de Comercio, para posteriormente en la letra B, indicar los “Riesgos que pueden ser contratados en el mismo acto o de manera conjunta”, mencionando entre los referidos al pago de la deuda, primero los de “Cobertura total de la deuda” entre los que se señala: a) Fallecimiento (desgravamen) y b) Invalidez total y permanente 2/3. Esto es, sólo se podrá establecer una invalidez total y permanente de, al menos 2/3. En segundo quedan insertó dentro de estos riesgos los de Cobertura total o parcial de la deuda por: a) Cesantía, b) Perjuicio por paralización, c) Invalidez parcial y permanente menor a 2/3, d) Incapacidad temporal y e) Hospitalización.



NOVENO: Que de lo expuesto, cabe descartar entonces el reproche de ilegalidad que denuncia el reclamante, como quiera que el “seguro de crédito” sobre el que trata la presente causa, no quedó incorporado en la NCG 460, pues no fue determinado expresamente por la CMF como aquellos que podía ser contratado en el mismo acto o de manera conjunta con el servicio financiero.

En efecto, la pretensión de que tal seguro queda incorporado dentro de aquellos previsto en el artículo 538 bis del Código de Comercio no es suficiente, pues el precepto legal, como se dijo previamente, encomendó a la CMF determinar cuáles seguros destinados a asegurar el pago de la deuda o de los bienes dados en garantía podían contratarse en forma conjunta con el producto o servicio financiero y lo cierto es que la NCG 460 no incluyó al seguro de crédito.

Tampoco es posible aceptar que este seguro debiera entenderse incorporado en la letra A.- del Título III de la norma general, pues allí sólo se mencionan las características de esta clase de seguros, pero no su determinación, cuestión que sólo se hace en la letra B cuando se detallan los riesgos asegurados, tanto es así que expresamente dicho literal señala “sólo podrán contemplar los siguientes riesgos” redacción que excluye la posibilidad de incorporar otros tipos de seguros, como lo es el de crédito.

En consecuencia este primer capítulo de ilegalidad, debe desestimarse.

II.- De la segunda ilegalidad: Vulneración del artículo 537 del Código de Comercio.

DECIMO: Que también sostiene la reclamante que el acto reclamado vulnera esta norma en cuanto se ordenó a su parte



“Ajustarse” al Título IV de la Norma 460, que establece que el cliente financiero –el tomador no asegurado- puede terminar anticipadamente el seguro, en cualquier momento, independiente del medio por el cual lo contrató. Además refiere que se le instruye a su representada el incorporar a la póliza una leyenda que reproduce y que se refiere al carácter voluntario de estos seguros y la posibilidad de retractación si la contratación se hizo por un medio a distancia y que se pueden terminar anticipadamente en cualquier momento, independiente del medio utilizado para su contratación, en circunstancias que el artículo 537 considera que el deudor del mutuo hipotecario y tomador del seguro de crédito no pueden poner término al contrato de seguro, pues el único que tiene la facultad es el asegurado que en este caso es el acreedor.

UNDECIMO: Que sobre este aspecto la CMF sostiene que en realidad más que un reclamo contra el acto administrativo dirigido respecto de la reclamante, se trata de un reclamo en contra de la NCG 460, en circunstancias que ya venció el plazo para impugnarla, también se indica que se trata de la contratación de un seguro en contravención a dicha norma.

DUODECIMO: Que efectivamente acierta la CMF cuando aduce que en el fondo se está cuestionando la legalidad de la NCG 460, soslayando de esta forma el plazo que al efecto prevé el artículo 70 de la ley N° 21.000 que permite reclamar, entre otros actos, de una norma de carácter general –como lo es la NCG 460- dentro del plazo de 10 días hábiles contabilizado en la forma prescrita en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, es del caso que la NCG 460 fue dictada el 13 de agosto de 2021, y entró en vigencia 60 días contados desde la fecha



de la emisión, por lo que al presentarse un reclamo recién el 4 de enero de 2023, cuestionando en el fondo el contenido de esa normativa, aquella no puede ser atendida por esta vía contenciosa especial.

Así no debe olvidarse que se trata de una especie de seguros que han sido regulados en el artículo 538 bis del Código de Comercio cuya determinación fue entregada a la CMF de tal suerte que si se estimó que el órgano regulador se excedió en sus atribuciones debió oportunamente reclamarse por lo que no siendo así, la sociedad regulada debe conformar su actuación a lo que instruye la CMF.

En consecuencia, también debe descartarse la ilegalidad de los actos administrativos particulares de que se trata y que afectan a la reclamante, pues estos sólo se adecuan a lo dispuesto en la NCG 460.

III.- De la tercera infracción de legalidad: El acto reclamado vulnera el artículo 6 inciso primero de la Constitución y el artículo 2 de la ley N° 18.575.

DECIMO TERCERO: Que otro capítulo de ilegalidad está orientado a acusar una violación al principio de legalidad instaurado constitucional y legalmente. Se insiste en que la CMF al dictar el acto administrativo reclamado lo hizo en clara infracción al artículo 538 bis del Código de Comercio y 5 de la ley N° 21.000. Sostiene que la reclamada dictaminó algo distinto y opuesto a lo señalado por el legislador.

DECIMOCUARTO: Que basta para rechazar este cuestionamiento la circunstancia que la denuncia vuelve a descansar en un exceso en el que habría incurrido la CMF en relación a la atribución que efectuó el legislador, más ello, como ya se dijo



redunda en el examen sobre la legalidad de la NCG 460, cuestión que no puede ser abordada por esta vía por un tema de oportunidad.

Sin perjuicio, ya se razonó, a propósito del primer capítulo de ilegalidad en cuanto a que fue el artículo 538 bis del Código de Comercio el que encomendó a la CMF la tarea de determinar cuáles seguros destinados a asegurar el pago de la deuda o de los bienes dados en garantía eran los que podían contratarse en forma conjunta o en el mismo acto con la operación financiera de tal suerte que, si no se incorporó el seguro de crédito o si aquello merecía alguna duda debió reclamarse dentro del plazo que establece el artículo 70 de la ley N° 21.000.

Por lo tanto, se descarta también este reproche de ilegalidad.

IV.- De la cuarta ilegalidad: El acto reclamado vulnera el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y el artículo 4 de la Ley de Seguros.

DECIMO QUINTO: Finalmente refiere la reclamante que conforme a la norma constitucional citada -19 N° 21- y a la de la ley de seguros, su representada está autorizada para desarrollar su negocio, e indica que como consecuencia del acto administrativo reclamado, no podrá seguir comercializando los contratos de seguro de créditos que ofrece al mercado, impidiéndose así ejercer el legítimo derecho a desarrollar su respectiva actividad económica que no es contraria a la ley ni a las normas que la regulan.

DECIMO SEXTO: Que nadie discute que AVLA está autorizada para operar en el campo de los contratos de seguro, pero en su quehacer se encuentra obligada a respetar la ley y las demás normas de orden regulatorio que dicta su fiscalizador.



Dentro de este escenario la Carta Política si bien garantiza como derecho fundamental el poder desarrollar una actividad económica, exige el respeto a las normas legales que la regulan. Así, fue el legislador el que estableció que era la CMF la que debía determinar cuáles seguros se podían contratar en forma conjunta o en el mismo acto con la respectiva operación financiera, mandato que se cumplió a través de la NCG N° 460, por lo que la compañía reclamante debe ajustar su actividad a dicha norma mientras ésta se encuentre vigente, no pudiendo esta Corte a propósito de la dictación de actos administrativos que son una consecuencia de aquella revisar la legalidad de la respectiva norma general.

DECIMO SEPTIMO: Que conforme a lo anterior, el presente reclamo de ilegalidad debe ser desestimado por las razones ya indicadas, sin que permitan variar lo resuelto las opiniones vertidas por los académicos que sustentan la posición de la reclamante.

De conformidad además, a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley N° 21.000 **se rechaza, sin costas** el reclamo de ilegalidad deducido en representación de AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A. en contra del Oficio Ordinario N°89.259, de fecha 25 de noviembre de 2022, ratificado por la Resolución Exenta 8.847, de fecha 22 de diciembre de 2022 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

N° Contencioso Administrativo-9-2023.



No firma la Ministra señora López Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, doce de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

